

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 11 de diciembre de 2020

Auto Interlocutorio No. 129

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
EXPEDIENTE:	76001-23-33-010- 2018-00693-00
DEMANDANTE:	BENJAMIN ARANGO CAMACHO
DEMANDADO:	CAMARA DE COMERCIO DE CALI
ASUNTO	AUTO NIEGA MEDIDA CAUTELAR

I. OBJETO DE LA DECISION

Procede el Despacho a resolver la solicitud de medida cautelar formulada por la parte actora, con la que pretende suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos que se describen a continuación:

- Registro inscrito en la Cámara de Comercio de Cali el 08 de mayo de 2018, donde la firma AGUILAR GALVIS BENJAMIN vende a la señora JORDAN OLBEIRA el establecimiento de comercio FARMACIA BRITANICA bajo el número 1172 del libro VI, con matrícula mercantil No. 6912-2 del 05 de abril de 1972.
- Registro inscrito en la Cámara de Comercio de Cali el 08 de mayo de 2018, donde la firma AGUILAR GALVIS BENJAMIN canceló su matrícula mercantil No. 6911-1 bajo el número 37280 del libro XV.

II. ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

La parte demandante solicitó la suspensión provisional de los actos administrativos demandados, en razón a que los registros realizados en torno al establecimiento de comercio FARMACIA BRITÁNICA, fueron resultado de un acto fraudulento que lesiona el derecho del demandante como legatario testamentario, a lo que suma que, por tratarse de un registro público, se pone en riesgo a terceros de buena fe que pretendan efectuar negocios jurídicos con dicho establecimiento de comercio.



Radicación	: 76001-23-33-010-2018-00693-00
Medio de control	: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Demandante	: BENJAMIN ARANGO CAMACHO
Demandado	: CAMARA DE COMERCIO DE CALI
Asunto	: AUTO NIEGA MEDIDA CAUTELAR

2

III. TRASLADO DE LA MEDIDA CAUTELAR

De la solicitud de medida cautelar se corrió traslado a la parte demandada de conformidad con lo establecido en el artículo 233 del CPACA¹.

La demandada Cámara de Comercio de Cali, se pronunció respecto de la medida cautelar solicitada y, en síntesis, adujo que no se cumple con los requisitos del artículo 231 del CPACA, por lo cual resulta improcedente y solicita no acceder a su decreto.

Señaló que, la demanda promovida se encuentra evidentemente desenfocada, toda vez que se centra en reprochar un presunto acto fraudulento cometido por una persona natural, por lo tanto, que su censura se encuentra dirigida contra él y no contra la entidad demandada, a quién además no le compete identificar la autenticidad o veracidad de los documentos que le son expuestos para realizar su función registral.

Indicó que, el demandante refirió de manera general que los actos de registro demandados vulneran disposiciones legales, sin precisar con exactitud la presunta normatividad violada, incumpliendo con otro de los requisitos fundamentales para su procedencia, igualmente que ante la falta de concreción jurídica que padece la solicitud de medida cautelar, resulta imposible determinar un juicio de ponderación de interés público, que genera incertidumbre frente al concepto de violación expuesto en la demanda.

En igual sentido, el demandante de forma especulativa hace mención a que de no otorgarse la medida cautelar invocada, se podría causar perjuicios a terceros de buena fe que tuvieran intención de realizar negocios jurídicos con el establecimiento, así como el perjuicio generado con la atribución de la titularidad del derecho de propiedad sobre el mismo.

IV. CONSIDERACIONES

1.1 Problema Jurídico

¿El asunto que se discute se contrae a establecer si es procedente decretar la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos demandados?

Para resolver el problema jurídico, se realizará un recuento normativo y jurisprudencial acerca de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo, de la suspensión provisional, las medidas preventivas y luego aplicarlo al caso concreto.

¹ Ver folio 47

1.2 Recuento normativo y jurisprudencial acerca de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo – De la suspensión provisional y las medidas preventivas – Reiteración jurisprudencial:

- **Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo – Reiteración jurisprudencial:**

El artículo 238 de la Constitución Política establece:

“ARTICULO 238. La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial”

La Corte Constitucional, en sentencia C-834 de 2013 se pronunció respecto a la finalidad de las medidas cautelares, de la siguiente manera:

“(…) Las medidas cautelares, son aquellos mecanismos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello, esta Corporación señaló, en casos anteriores, que estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la Ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido (...)”².

Por su parte, la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, creó un moderno y amplio régimen de medidas cautelares, adicionales a la suspensión provisional de actos administrativos y en su artículo 229 le da una amplia facultad al juez para que decrete las medidas cautelares que estime necesarias para *“proteger y garantizar, temporalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”*. Además indicó que las medidas cautelares proceden: **i)** en cualquier momento; **ii)** a petición de parte debidamente sustentada; y **iii)** en todos los procesos declarativos promovidos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

El CPACA en su artículo 230 clasificó las medidas cautelares como: **i) preventivas** (numeral. 4), cuando impiden que se consolide una afectación a un derecho; **ii) conservativas** (numeral 1 primera parte), si buscan mantener o salvaguardar un *statu quo*; **iii) anticipativas** (numerales 1 segunda parte, 2 y 3), de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensión del demandante; y **iv) de suspensión** (numerales 2 y 3), que

² Corte Constitucional, Sentencia C-834/13. Referencia: Expediente D -9509. Demandante: Martín Bermúdez Muñoz. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 613 (parcial) de la Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso”. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil trece (2013).



Radicación : 76001-23-33-010-2018-00693-00
Medio de control : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Demandante : BENJAMIN ARANGO CAMACHO
Demandado : CAMARA DE COMERCIO DE CALI
Asunto : AUTO NIEGA MEDIDA CAUTELAR

4

corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa.

Los artículos 231 a 233 ibídem determinan los requisitos, la caución y el procedimiento para decretar las medidas cautelares; normas que son aplicables cuando se solicita la adopción de alguna de las cautelas enunciadas en el artículo 230.

En providencia del 31 de mayo de 2019, el Consejo de Estado – Sección Primera, C.P. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, radicación No. 11001-03-24-000-2014-00682-00, recordó en cuanto a los criterios de aplicación que debe seguir el juez para adoptar una medida cautelar lo siguiente:

*“ En cuanto a los **criterios de aplicación** que debe seguir el juez para la adopción de una medida cautelar, como ya se anunció, éste cuenta con un amplio margen de discrecionalidad, si se atiende a la redacción de la norma que señala que “podrá decretar las que considere necesarias”³. No obstante lo anterior, a voces del artículo 229 del CPACA, su decisión estará sujeta a lo regulado en dicho Estatuto, previsión que apunta a un criterio de proporcionalidad, si se armoniza con lo dispuesto en el artículo 231 ídem, según el cual para que la medida sea procedente el demandante debe presentar “documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un **juicio de ponderación de intereses**, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla” (Resaltado fuera del texto).*

Sobre este asunto, en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en providencia de 17 de marzo de 2015 (Expediente núm. 2014-03799, Consejera ponente: doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez), señaló:

*“[...] La doctrina también se ha ocupado de estudiar, en general, los criterios que deben tenerse en cuenta para el decreto de medidas cautelares, los cuales se sintetizan en **el fumus boni iuris y periculum in mora**. **El primero**, o apariencia de buen derecho, se configura cuando el Juez encuentra, luego de una apreciación provisional con base en un conocimiento sumario y juicios de verosimilitud o probabilidad, la **posible existencia de un derecho**. **El segundo**, o perjuicio de la mora, exige la comprobación de **un daño ante el transcurso del tiempo y la no satisfacción de un derecho** [...]”⁴ (Negrillas fuera del texto).*

Por su parte, la Sección Tercera, mediante auto de 13 de mayo de 2015 (Expediente núm. 2015-00022, Consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa), sostuvo lo siguiente:

“[...] Lo anterior quiere significar que el marco de discrecionalidad del Juez no debe entenderse como de arbitrariedad, razón por la cual le es exigible a éste la adopción de una decisión judicial suficientemente motivada, conforme a los materiales jurídicos vigentes y de acuerdo a la realidad fáctica que la hagan comprensible intersubjetivamente para cualquiera de los sujetos protagonistas del proceso y, además, que en ella se refleje la

³ Artículo 229 del CPACA

⁴ Providencia de 17 de marzo de 2015, Expediente núm. 2014-03799, Consejera ponente: doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez.



Radicación : 76001-23-33-010-2018-00693-00
Medio de control : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Demandante : BENJAMIN ARANGO CAMACHO
Demandado : CAMARA DE COMERCIO DE CALI
Asunto : AUTO NIEGA MEDIDA CAUTELAR

5

pretensión de justicia, razón por la cual es dable entender que en el escenario de las medidas cautelares, el Juez se enfrenta a la exposición de un razonamiento en donde, además de verificar los elementos tradicionales de procedencia de toda cautela, es decir el fumus boni iuris y el periculum in mora, debe proceder a un estudio de ponderación y sus sub principios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu, ya que se trata, antes que nada, de un ejercicio de razonabilidad [...]”⁵ (Negrillas no son del texto).

Se tiene entonces que, en el examen de procedencia de la medida cautelar solicitada, debe verificarse la concurrencia de los elementos que ameritan la imposición de la cautela, a saber: **(i) fumus boni iuris**, o apariencia de buen derecho, **(ii) periculum in mora**, o perjuicio de la mora, y, **(iii)** la ponderación de intereses.

- **La medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto acusado – Reiteración jurisprudencial:**

Como se dijo en líneas anteriores, la suspensión provisional de los efectos jurídicos de los actos acusados tiene su fundamento constitucional en el artículo 238 de la C.P. y su trámite, procedencia y demás requisitos se desarrolla en los artículos 229 y ss del CPACA.

Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesorio, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad, en el proceso ordinario en el que se hubiere decretado tal medida. Es por ello que su finalidad está dirigida a “evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de

⁵ Sobre la aplicación de la **proporcionalidad**, la misma providencia indicó: “(...) Se ha sostenido en anteriores ocasiones: (...) Allí donde el Juez Administrativo no esté gobernado por reglas, lo más posible es que la actuación se soporte en principios o mandatos de optimización, luego la proporcionalidad y ponderación no son metodologías extrañas en la solución de conflictos y en la reconducción de la actividad de la jurisdicción contencioso administrativa al cumplimiento material de los postulados del Estado social de derecho. En todo caso, la proporcionalidad y la ponderación no representan ni la limitación, ni el adelgazamiento de los poderes del juez administrativo, sino que permiten potenciar la racionalidad y la argumentación como sustento de toda decisión judicial. Cabe, entonces, examinar cómo se sujeta la actividad discrecional del juez administrativo a las reglas de la ponderación, como expresión más depurada del principio de proporcionalidad” // En consecuencia, la observancia de este razonamiento tripartito conlleva a sostener que en la determinación de una medida cautelar, que no es más que la adopción de una medida de protección a un derecho en el marco de un proceso judicial, el Juez debe tener en cuenta valoraciones de orden fáctico referidas a una estimación de los medios de acción a ser seleccionados, cuestión que implica i) que la medida decretada sea adecuada para hacer frente a la situación de amenaza del derecho del afectado (idoneidad); ii) que, habida cuenta que se trata de una decisión que se adopta al inicio del proceso judicial o, inclusive, sin que exista un proceso formalmente establecido, la medida adoptada sea la menos lesiva o invasora respecto del marco competencial propio de la administración pública (necesidad) y, por último, es necesario iii) llevar a cabo un razonamiento eminentemente jurídico de ponderación, en virtud del cual se debe determinar de manera doble el grado de afectación o no satisfacción de cada uno de los principios contrapuestos ... El propio artículo 231 del CPACA. da lugar a estar consideración imperativa en el numeral 4, literales a) y b), cuando prescribe como exigencia: ‘Que, adicionalmente, se cumpla con una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.”



Radicación : 76001-23-33-010-2018-00693-00
Medio de control : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Demandante : BENJAMIN ARANGO CAMACHO
Demandado : CAMARA DE COMERCIO DE CALI
Asunto : AUTO NIEGA MEDIDA CAUTELAR

6

un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho”.⁶

Para la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos la Ley 1437 de 2011 indica que debe referirse expresamente a la confrontación de legalidad que debe efectuar el juez de la medida; es decir, ese **análisis inicial de legalidad** del acto acusado, de cara a las normas que se estiman infringidas.

El Consejo de Estado – Sección Primera, en providencia del 31 de mayo de 2019, C.P. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, anteriormente citada, recordó los postulados de la providencia del 13 de mayo de 2015⁷ y señaló que:

“(…) la suspensión provisional, como toda medida cautelar, debe estar siempre debidamente sustentada en los dos pilares fundamentales sobre los cuales se edifica todo sistema cautelar, a saber: los principios del periculum in mora y del fumus boni iuris, en virtud de los cuales siempre se tendrá que acreditar en el proceso el peligro que representa el no adoptar la medida y la apariencia del buen derecho respecto del cual se persigue un pronunciamiento definitivo en la sentencia que ponga fin al litigio (…).”

Tal visión ha sido compartida por la precitada Sección Primera del Consejo de Estado, en el auto del 27 de agosto de 2015⁸, en el cual subrayó lo siguiente:

“(…) En esta providencia no se está adoptando decisión de fondo, pues lo que se resuelve es la solicitud de suspensión provisional, la cual se niega mediante auto interlocutorio, entre otras razones, porque no se configuran los requisitos que la Jurisprudencia y la Doctrina denominan Fumus bonis iuris (aparencia de buen derecho) y periculum in mora (necesidad de urgencia de la medida cautelar)”.

Acerca de la forma en la que el juez debe abordar este análisis inicial, la citada providencia de 17 de marzo de 2015 (Expediente núm. 2014-03799), sostuvo:

*“(…) Para el estudio de la procedencia de esta cautela se requiere una **valoración del acto acusado** que comúnmente se ha llamado **valoración inicial**, y que implica **una confrontación de legalidad de aquél con las normas superiores invocadas, o con las pruebas allegadas junto a la solicitud**. Este análisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusión de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, **pero con base en una aprehensión sumaria, propia de una instancia en la que las partes aún no han ejercido a plenitud su derecho a la defensa**. Y esa valoración inicial o preliminar, como bien lo contempla el inciso 2º del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **no constituye prejuzgamiento**, y es evidente que así lo sea, dado que su resolución parte de un conocimiento sumario y de un estudio que, si bien*

⁶ Providencia citada *ut supra*, Consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Bogotá D.C., 13 de mayo de 2015. Radicación número: 11001-03-26-000-2015-00022-00(53057). Actor: CARACOL Televisión S.A. y RCN Televisión S.A. Demandado: Autoridad Nacional de Televisión – ANTV. Referencia: Medio de control de nulidad simple (Auto medida cautelar de suspensión provisional)

⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera ponente: María Elizabeth García González. Bogotá, D.C., 27 de agosto de 2015. Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00194-00. Actor: Marco Fidel Ramírez Antonio. Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social.



Radicación : 76001-23-33-010-2018-00693-00
Medio de control : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Demandante : BENJAMIN ARANGO CAMACHO
Demandado : CAMARA DE COMERCIO DE CALI
Asunto : AUTO NIEGA MEDIDA CAUTELAR

7

permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisión final (...)” (Resaltado fuera del texto).

Como lo refiere la providencia transcrita, es importante la prevención efectuada por el legislador al advertir que la decisión sobre la medida cautelar, de ningún modo implica prejuzgamiento, teniendo en cuenta que, como lo ha precisado la Jurisprudencia del Consejo de Estado – Sección Primera, se trata de “*mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto*”⁹.

- **La Medida Cautelar Preventiva**

Tal como se señaló en precedencia, conforme al artículo 230 del CPACA las medidas cautelares son de naturaleza preventivas (numeral 4), conservativas (numeral 1 primera parte) anticipativas o de suspensión (numerales 1 segunda parte, 2 y 3). En este orden de ideas, la norma *ibídem* enumera las posibles medidas que pueden adoptarse, entre las que se encuentran cautelas negativas y positivas.

La cautela negativa por excelencia es la suspensión provisional, cuando el objeto de control es un acto administrativo. Las cautelas positivas operan cuando el litigio versa sobre la inactividad o las actuaciones de la Administración: hechos u operaciones administrativas, y dichas cautelas son de tipo preventivo, conservativo y anticipativo.

Respecto de las medidas preventivas, estas tienen por finalidad evitar que se configure un perjuicio o se vulneren los derechos del demandante¹⁰. La Ley 1437 consagró, dentro los procesos contencioso administrativos, un procedimiento que tiene por finalidad evitar la inejecución de la sentencia, esto es, diseñó un proceso

⁹ Así lo sostuvo la Sala en la providencia de 11 de marzo de 2014 (Expediente núm. 2013 00503. Consejero ponente: doctor Guillermo Vargas Ayala), al expresar que: “Con el ánimo de superar los temores y las reservas que siempre acompañaron a los Jueces respecto del decreto de la suspensión provisional en vigencia de la legislación anterior, célebre por su escasa efectividad producto de las extremas exigencias que la Jurisprudencia le impuso para salvaguardar su imparcialidad, el inciso segundo del artículo 229 del C.P.A.C.A. expresamente dispone que ‘[l]a decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento’. De lo que se trata, entonces, con esta norma, es de brindar a los Jueces ‘la tranquilidad de que se trata de mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto sub lite’ []. Una suerte de presunción iure et de iure, sobre cómo acceder a la medida no afecta la imparcialidad del Juez ni compromete su capacidad de discernimiento ni poder de decisión, que busca además promover la efectividad del nuevo régimen cautelar introducido. // La Jurisprudencia ya ha ido señalado que este enunciado debe ser visto como un límite a la autorización que se otorga al Juez para que analice los hechos, las pruebas y los fundamentos del caso, pues es evidente que por tratarse de una primera aproximación al asunto este análisis debe ser apenas preliminar, razón por la cual no puede suponer un examen de fondo o ‘prejuzgamiento’ de la causa []. La carga de argumentación y probatoria que debe asumir quien solicita la medida cautelar, garantizan que el Juez tenga suficientes elementos de juicio para emprender esta valoración sin tener que desplegar un esfuerzo analítico propio de la fase final del juicio ni renunciar ni relevarse del examen más profundo que debe preceder a la sentencia”.(Negritillas fuera del texto).

¹⁰ Consejo de Estado Sección Cuarta, sentencia de 21 de mayo de 2015, radicación 11001-03-24-000-2013-00534-00



Radicación : 76001-23-33-010-2018-00693-00
Medio de control : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Demandante : BENJAMIN ARANGO CAMACHO
Demandado : CAMARA DE COMERCIO DE CALI
Asunto : AUTO NIEGA MEDIDA CAUTELAR

8

cautelar que se torna en instrumental del proceso principal¹¹, que corresponde no solo a lo previsto en el artículo 238 de la Constitución Política sino también busca realizar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia¹².

Así, las medidas cautelares preventivas buscan proteger la realización de las decisiones judiciales, ya que permiten que el objeto del juicio permanezca inalterado durante el trámite del proceso, pues de lo contrario el restablecimiento del ordenamiento jurídico por medio de la sentencia sería puramente formal y no material.

Por ende, para su decreto se requiere que: **i)** exista la apariencia de buen derecho, esto es, que las pretensiones del proceso aparezcan debidamente fundadas; que el demandante haya demostrado, así sea sumariamente, la titularidad del derecho o derechos invocados; **ii)** que se efectúe un juicio de ponderación de intereses que permita determinar si resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla, y **iii)** que exista peligro para la efectividad de la sentencia, esto es, que se produzca un perjuicio irremediable o que los efectos de la sentencia serían nugatorios¹³.

1.3 Caso Concreto

Como se señaló en el cuadro normativo y jurisprudencial, en el examen de procedencia de la medida cautelar solicitada debe verificarse la concurrencia de los elementos que ameritan la imposición de la cautela, a saber: **(i) fumus boni iuris**, o apariencia de buen derecho, **(ii) periculum in mora**, o perjuicio de la mora y **(iii)** la ponderación de intereses.

Se procederá a establecer si se cumplen cada uno de los ítems en el caso concreto.

Fumus Boni Iuris o Apariencia de Buen Derecho

Dicho requisito consiste en que las pretensiones del proceso aparezcan debidamente fundadas, que el demandante haya demostrado así sea sumariamente y se configura cuando el juez encuentra, luego de una apreciación provisional con base en un conocimiento sumario y juicioso de verosimilitud o probabilidad, la posible existencia de un derecho.

¹¹ Gómez Aranguren, Gustavo. El régimen de medidas cautelares en la Ley 1437 de 2011. En: Briceño de Valencia y Zambrano Cetina (Coord.) *Instituciones del Derecho Administrativo en el nuevo Código. Una mirada a la luz de la Ley 1437 de 2011*. Banco de la República. Bogotá.

¹² Constitución Política de Colombia:

Artículo 238. La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial.

Artículo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.

¹³ Ibíd.

Radicación	: 76001-23-33-010-2018-00693-00
Medio de control	: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Demandante	: BENJAMIN ARANGO CAMACHO
Demandado	: CAMARA DE COMERCIO DE CALI
Asunto	: AUTO NIEGA MEDIDA CAUTELAR



9

La parte demandante consideró que procede la suspensión provisional de los actos demandados, en razón a que los registros realizados en torno al establecimiento de comercio FARMACIA BRITÁNICA, fueron resultado de un acto fraudulento que lesiona el derecho del demandante como legatario testamentario, a lo que suma que, por tratarse de un registro público, se pone en riesgo a terceros de buena fe que pretendan efectuar negocios jurídicos con dicho establecimiento de comercio.

Revisados los argumentos de la solicitud de medida cautelar, se tiene que el demandante refirió de manera general que los actos de registro demandados vulneran disposiciones legales, sin precisar con exactitud la presunta normatividad violada, incumpliendo con los requisitos fundamentales para su procedencia consagrados en el artículo 231 del CPACA.

Así las cosas, no sería posible establecer si los actos demandados violan disposiciones legales, por cuanto que resulta ser un asunto que no se evidencia de la simple confrontación de la norma, pues obedece a inconformidades de tipo interpretativo, que requieren de un estudio probatorio y legal que no son propios de esta etapa procesal, el cual solo puede realizarse en la sentencia.

En tal sentido, se reitera que un requisito de prosperidad de la medida cautelar de suspensión provisional, consiste en que de la confrontación del acto demandado con la norma invocada como vulnerada y las pruebas que se pretendan hacer valer se derive la violación de las disposiciones superiores. En este asunto es necesario examinar y valorar diversos aspectos de carácter probatorio e interpretativo que no son propios de esta etapa procesal, por lo que no se puede advertir en este momento una violación normativa y, por ende, la apariencia de buen derecho que exige el decreto de una medida cautelar.

Lo anterior sería suficiente para negar la medida cautelar solicitada; sin embargo, es preciso indicar que no se cumple con el requisito de “peligro en la mora”, el cual consiste en acreditar en el proceso el peligro que representa el no adoptar la medida solicitada, en razón a que la parte demandada presupone que se podrían causar perjuicios a terceros de buena fe que tuvieran intención de realizar cualquier tipo de negocio jurídico con el establecimiento objeto de controversia.

Por lo anterior, el Despacho advierte que no se encuentra acreditado ninguno de los requisitos para que sea procedente la medida cautelar y, por tanto, se negará la misma.

En consecuencia, se;

Radicación : 76001-23-33-010-2018-00693-00
Medio de control : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Demandante : BENJAMIN ARANGO CAMACHO
Demandado : CAMARA DE COMERCIO DE CALI
Asunto : AUTO NIEGA MEDIDA CAUTELAR



10

RESUELVE

NEGAR la medida cautelar solicitada por la parte demandante, consistente en la suspensión provisional de los actos administrativos demandados, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT
Magistrado